

● LOS CRÍMENES de guerra cometidos por grupos armados no son indultables.

● LAS CORTES internacionales pueden castigar a Estados si no juzgan.

● JUSTICIA Y Paz genera debate en el tema de reparación a las víctimas.

Los tribunales contra la impunidad

El Estatuto de la Ley de Justicia y Paz que define los parámetros con los que se tratará a los combatientes y a las víctimas durante y luego de un proceso de negociación, no puede abstraerse de la legislación internacional.

Así lo reconocen el Gobierno, Ong y varios juristas. Estos últimos explican que con base en los conceptos que den sobre esa ley las cortes Constitucionales colombiana, la Interamericana de Derechos Humanos y la Penal Internacional, se puede tener una visión clara para responder a quienes consideren esa norma como un camino a la impunidad y no como la forma efectiva de reparar a las víctimas e impartir justicia.

En el caso de las dos cortes internacionales los sanciones recaen sobre el Estado, a quien se le exhorta a cumplir todos los convenios suscritos y a proteger, por encima de cualquier consideración, a los civiles y a esclarecer los crímenes atroz.

Así ocurrió el 7 de octubre pasado, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la masacre de Mapiriján (Meta), cometida por las Autodefensas entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

Según la CIDH, el Estado es responsable por omisión de las Fuerzas Militares que no actuaron ante las denuncias de la población y alertas que hacían previsible la matanza.

El tribunal lo condenó a pagar cerca de 3 millones de dólares a las familias de 10 de las 40 víctimas y a realizar un acto público en el que reconozca sus fallas.

Por esta masacre la justicia colombiana condenó a 40 años de prisión a Carlos Castaño (desaparecido, considerado el determinante); y a 32 años, al ex comandante de la Brigada Móvil No. 2, coronel Lino Hernández Sánchez, y al sargento José Miller Urueña. El sargento Juan Carlos Gamarrá Polo, recibió una pena de 22 años de prisión.

El general (r) Jaime Humberto Ibañez, ex comandante de la VII Brigada, es procesado por la justicia ordinaria.

En la CIDH están en curso varios procesos, entre ellos uno por la matanza de ocho civiles de San José de Apartadó, Uribe, en febrero de 2003.

Más allá

Pero más allá de las condenas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tiene en su poder la revisión del caso de la matanza de ocho civiles en San José de Apartadó, en febrero de 2003.

Temas

Cómo delibera la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Quién puede llegar a la Corte
Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la OEA, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violaciones de la Convención por un Estado Parte para que sean llevadas a la Corte.

¿Cómo funciona?
La Comisión conoce la queja y revisa si es admisible una solución amistosa. De no alcanzarse esta, la Comisión redactará un informe que contendrá los hechos y sus conclusiones. Este informe se envía de manera confidencial al Estado interesado. Finalizado este trámite, este caso puede ser sometido a consideración de la Corte, la cual tiene autoridad para disponer que se garantice al lesionado el goce del derecho conculcado y el pago de una justa indemnización si ello fuera procedente.

¿Cuáles son las fases?
La fase de excepciones preliminares, fase de fondo, fase de reparaciones y fase de supervisión de cumplimiento. El fallo emitido por la Corte, en cualquiera de sus fases, es definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpreta a solicitud de cualquier de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de 90 días a partir de la fecha de notificación.

¿Qué decide?
Medidas provisionales: En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, estas se mantienen activas mientras se mantenga la situación de gravedad y urgencia que pueda afectar la vida y/o la integridad de los beneficiarios de las mismas.

¿Cuánto se demora?
Un promedio de 94 meses.

por los grupos de autodefensas.

También pidieron que se investigue por acción y omisión a las autoridades que han facilitado la comisión de esos crímenes.

El Alto Comisionado para las Naciones Unidas y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, señalaron que el proyecto de juzgamiento a las autodefensas desconoce los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

"En el marco del cese de hostilidades y durante la vigencia de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia, las AUC han cometido más de 2.000 crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes se siguen cometiendo en el marco de un proceso de diálogo y negociación en el cual no se respeta el cese de hostilidades y se presentan graves y sistemáticos ataques a civiles sin que el Gobierno Nacional haya tomado medidas para proteger a la población civil o para hacer cumplir el cese de hostilidades", recordó la FIDH.

"De no hacerse, opera el principio de la complementación. Si un Estado no quiere

Las cortes internacionales

Corte Penal Internacional (CPI)

Es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad como la esclavitud, el apartheid, el exterminio, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, los secuestros y la agresión, entre otros. Tiene su sede en La Haya, Holanda.

El Estatuto de Roma que dio vida a la Corte Penal Internacional no ha sido firmado ni ratificado por Estados Unidos, Rusia, China, Israel e Irak. Colombia se acogió a él con una salvaguarda, de siete años, permitida por la misma Corte; es decir, la CPI podrá conocer solo los delitos de lesa humanidad y no los crímenes de guerra. En noviembre de 2006 este tipo de conductas sería susceptible de ser asumidas por este tribunal.

Corte Internacional de Justicia

Con sede en La Haya, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas desde 1945. En concreto, existen dos tipos distintos de cuestiones que resuelve la Corte: asuntos contentiosos entre Estados en los cuales la Corte emite normas vinculantes entre las partes que se han sometido a sus decisiones, y los dictámenes que son inherentemente no vinculantes y, más bien, recomendatorios aunque sentando jurisprudencia.

Pueden recurrir a la Corte todas las partes en su Estatuto, que incluye automáticamente a todos los miembros de las Naciones Unidas. Un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas puede llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte en las condiciones que en cada caso determine la Asamblea General.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA (con sede en Costa Rica, es el único órgano jurisdiccional en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Tiene como su mandato la aplicación e interpretación de la Convención Americana.

La función contentiosa de la Corte se ejerce a través de la resolución de casos en los que se alegue que uno de los Estados Partes ha violado la Convención. De acuerdo con esta, la Corte puede conocer casos que sean presentados por un Estado parte o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También la presunta víctima y los familiares o sus representantes tienen participación autónoma en el proceso ante la Corte.

Tribunal Internacional para Ruanda

El Tribunal Internacional para Ruanda está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de infracciones del DIH, cometidas en el territorio de Ruanda, así como a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables por tales actos o violaciones cometidas en el territorio de los Estados vecinos, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.

El Tribunal Internacional para Ruanda tiene competencia para perseguir a las personas que hayan cometido un genocidio con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto se refiere a asesinatos de miembros del grupo, atentados contra su integridad física o mental, sometimiento intencional a condiciones de existencia que impliquen su destrucción física total.

Corte Europea de Derechos Humanos

La Corte Europea de Derechos Humanos es una de las tres instituciones encargadas de la responsabilidad de reforzar la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 (Las otras son la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Consejo de Europa).

Tiene potestad de resolver los recursos procedentes de los ciudadanos del conjunto de estos Estados, lo cual corresponde a un potencial de 700 millones de personas. Cualquier ciudadano de uno de los Estados que se haya adherido al Convenio Europeo de Derechos Humanos podrá presentar un recurso ante el tribunal. El derecho de recurso individual es así obligatorio, mientras que hasta ahora estaba sometido a una declaración de aceptación por parte de los Estados.

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

Fue creado en 1993, en aplicación de decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad sobre la base del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En virtud de su mandato estatutario, el Tribunal está habilitado para iniciar investigaciones y proceder con diligencias judiciales contra los autores de cualquier violación grave del Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometida en cualquier parte del territorio de la ex Yugoslavia desde 1991. Hasta hace poco, las actividades del tribunal se habían centrado esencialmente en crímenes cometidos entre 1991 y 1995 en Croacia y Bosnia-Herzegovina. Publicamente se ha atraído la atención sobre Kosovo a partir de 1998, cuando el fiscal pidió llevar a cabo una investigación.

o no puede investigar ni sancionar estos crímenes, o se simula justicia o se aplican leyes de indulto o amnistía, la CPI podrá actuar para que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación sean respetados (artículo 17.2 del estatuto de la CPI).

El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo en varias ocasiones que existen los ingredientes necesarios de justicia y paz, pues los beneficios que concede la iniciativa son solo para quienes confiesan sus delitos, mientras que quienes no lo hagan pueden llegar a

recibir todo el peso de la ley.

"Esperamos que este instrumento nos permita avanzar a la paz del país. Es la primera vez en la historia que adelantamos un proceso con requerimientos tan altos de justicia", dijo.

"Las AUC reconocen los riesgos que tienen frente a los tribunales internacionales, como lo manifestó el jefe político de ese grupo Iván Roberto Duque (a. Ernesto Bkz): "Es transitorio especial no significa que nosotros nos vamos a apartar del concepto de justicia, reparación y verdad del que habla tanto la comunidad internacional".